



Instramd
Instituto de Tránsito, Transporte y Movilidad Distrital

RESOLUCION No. 0113

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL DECRETO LEGISLATIVO 678 DEL 2020 Y SE OTORGAN TEMPORALMENTE BENEFICIOS"

La Directora (E) del instituto de Tránsito, Transporte y Movilidad Distrital –INSTRAMD en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas y la ley 769 de 2002, Acuerdo 014 del 2002, Acuerdo 007 de 2004, y

CONSIDERANDO

Que en fecha 20 de mayo de 2020, se expide por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Decreto Legislativo 678 de 2020 «Por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020».

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.

Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes.

Que el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social dio a conocer el primer caso de brote de enfermedad por Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional.

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual brote de enfermedad por Coronavirus - COVID-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de transmisión, toda vez que al 11 de marzo de 2020 a la OMS se habían

notificado cerca de 125.000 casos de contagio en 118 países y que a lo largo de esas últimas dos semanas el número de casos notificados fuera de la República Popular China se había multiplicado en trece (13) veces, mientras que el número de países afectados se había triplicado, por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes.

Que mediante la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en vigencia de la precitada resolución, arribaran a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y España.

Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 0 muertes y 3 casos confirmados en Colombia

Que mediante los Decretos 457 del 22 de marzo de 2020, 531 del 8 de abril de 2020, 593 del 24 de abril de 2020 y 636 del 06 de mayo de 2020, el presidente de la República impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, dentro de las cuales se ordenó el aislamiento preventivo Obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, desde las 00:00 horas del día 25 de marzo de 2020, de manera ininterrumpida, hasta las 00:00 horas del 25 de mayo de 2020.

Que la Organización Internacional del Trabajo, en el comunicado de fecha de 18 de marzo de 2020 sobre el «El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas», afirma que «[...] El Covid-19 tendrá una amplia repercusión en el mercado laboral. Más allá de la inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores y de sus familias, el virus y la consiguiente crisis económica repercutirán adversamente en el mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales, a saber: 1) la cantidad de empleo (tanto en materia de desempleo como de subempleo); 2) la calidad del trabajo (con respecto a los salarios y el acceso a protección social); y 3) los efectos en los grupos específicos más vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral

Que la Organización Internacional del Trabajo, en el referido comunicado, estima «[...] un aumento sustancial del desempleo y del subempleo como consecuencia del brote del virus. A tenor de varios casos hipotéticos sobre los efectos del Covid-19 en el aumento del PIB a escala mundial [...], en varias estimaciones preliminares de la OIT se señala un aumento del desempleo mundial que oscila entre 5,3 millones (caso "más favorable") y 24,7 millones de personas (caso "más desfavorable"), con respecto a un valor de referencia de 188 millones de desempleados en 2019. Con arreglo al caso hipotético de incidencia "media", podría registrarse un aumento de 13 millones de

desempleados (7,4 millones en los países de ingresos elevados). Si bien esas estimaciones poseen un alto grado de incertidumbre, en todos los casos se pone de relieve un aumento sustancial del desempleo a escala mundial. A título comparativo, la crisis financiera mundial que se produjo en 2008-9 hizo aumentar el desempleo en 22 millones de personas.

Que la Organización Internacional del Trabajo -OIT, en el citado comunicado, insta a los Estados a adoptar medidas urgentes para (i) proteger a los trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generados por el coronavirus COVID-19; (ii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; (iii) estimular la economía y el empleo, y (iv) sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el propósito de respetar los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y sostenida.

Que de conformidad con la declaración conjunta del 27 de marzo de 2020 del presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, mencionan: «Estamos en una situación sin precedentes en la que una pandemia mundial se ha convertido en una crisis económica y financiera. Dada la interrupción repentina de la actividad económica, el producto mundial se contraerá en 2020. Los países miembros ya han tomado medidas extraordinarias para salvar vidas y salvaguardar la actividad económica. Pero es necesario hacer más. Se debe dar prioridad al apoyo fiscal focalizado para los hogares y las empresas vulnerables a fin de acelerar y afianzar la recuperación en 2021.»

Que el Decreto 678 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional prevé en su artículo 7 facilidades a los deudores para que normalicen su situación ante la Entidad Distrital y se pongan al día con sus obligaciones, por lo que el Distrito con el fin de seguir las medidas ordenadas por el Gobierno Nacional, adelanta las medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales.

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19.

Que los efectos económicos negativos generados por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 a los habitantes del territorio nacional requieren de la atención y concurso de las entidades territoriales mediante la adopción de medidas extraordinarias encaminadas a atender las obligaciones de diferente naturaleza

Que dada la demanda de recursos para atender las crecientes necesidades generadas con esta crisis, se deben adoptar medidas extraordinarias que permitan la reducción y optimización de los procedimientos para ejecutar los recursos, así como contar con mayores rentas para destinarlas incluso a financiar gastos de funcionamiento propio de las entidades.

Que el sistema presupuestal colombiano ha dispuesto una serie de requisitos para ejecutar los recursos por parte de las entidades territoriales que implica que los gobernadores y alcaldes estén facultados por sus respectivas corporaciones administrativas

Que se han identificado limitaciones presupuestales en el orden territorial que impiden la asignación urgente de los recursos que demandan las actuales circunstancias * señalas en el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, por lo que se hace necesario una modificación normativa de orden temporal que permita a las entidades territoriales efectuar las operaciones presupuestas les que resulten necesarias.

Que algunas leyes, ordenanzas y acuerdos, han establecido destinaciones específicas de diferentes recursos de las entidades territoriales

Que se debe propender por instrumentos legales que doten a las entidades territoriales de mecanismos efectivos para atender la emergencia y los efectos en el empleo y las relaciones sociales que esto. Conlleva, permitiendo mayores líneas de acceso a crédito y endeudamiento;

Que el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 establece que los efectos económicos negativos sobre los habitantes del territorio nacional requieren de la atención a través de medidas extraordinarias referidas a condonar o aliviar las obligaciones de diferente naturaleza como tributarias, financieras, entre otras, que puedan verse afectadas en su cumplimiento de manera directa por efectos de la crisis

Que sobre esta materia se ha pronunciado la Corte Constitucional en sentencia C-060 de 2018, magistrada ponente Gloria Stella Ortiz Delgado, así: "resultan prima facie inconstitucionales, en tanto son contrarias al deber constitucional de tributar y a los principios de equidad y justicia tributaria. No obstante, las mismas pueden ser excepcionalmente compatibles con la Carta Política, cuando superen un juicio estricto de proporcionalidad, en el que se demuestre que (i) la medida legislativa es imprescindible para cumplir con fines constitucionales imperiosos".

Que la crisis generada por la presencia del nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio nacional ha impactado de manera negativa a todos los sectores de la economía nacional, ralentizando su desempeño y disminuyendo de manera significativa sus ingresos y la capacidad de pago de sus obligaciones laborales, comerciales y tributarias, por lo que se hace necesario establecer medidas que morigeren dicho impacto y les permitan a los diferentes sectores honrar sus obligaciones.

Que se consideró la necesidad de dotar de instrumentos legales a las entidades territoriales para contar con mecanismos efectivos para atender la emergencia y los efectos en el empleo y las relaciones sociales que esto conlleva, permitiendo mayores líneas de acceso a crédito y endeudamiento; Que, el 18 de mayo de 2020, la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de

Hacienda y Crédito Público, realizó un estudio que contiene la aproximación a las implicaciones presupuestales que se pueden derivar de la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 para las entidades territoriales.

Que teniendo en cuenta las diferentes manifestaciones de las entidades territoriales sobre el comportamiento de sus ingresos, y de acuerdo con las estimaciones realizadas por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre las posibles contracciones de los ingresos corrientes de las entidades territoriales, se estima que una reducción de los ingresos corrientes de libre. Destinación, que sirven de fuente de pago para el gasto de funcionamiento de las entidades territoriales, podría generar incumplimiento en los límites de gastos definidos en la Ley 617 del 2000.

Que de conformidad con las estimaciones efectuadas por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre las posibles contracciones de los ingresos corrientes de los departamentos, municipios y distritos, se estima que el mayor impacto en las finanzas de las entidades territoriales se verá reflejado en los años 2020 y 2021, motivo por el cual las diferentes medidas que se adopten para aliviar este impacto deberán aplicarse durante tales vigencias. Que la Ley 549 de 1999 creó el Fondo Nacional Pensiones las Entidades Territoriales -FONPET- como un fondo sin personería jurídica administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual tiene por objeto recaudar y asignar los recursos.

Las cuentas de las entidades territoriales para coadyuvar a la financiación de su pasivo pensional/o

Que para alcanzar el objetivo del cubrimiento del pasivo pensional territorial, la Ley 549 de 1999 determinó varias fuentes de ingresos, dentro de los que se encuentran fuentes del orden departamental, distrital, municipal y de la nación, originados en rubros específicos de ingresos, los cuales constituyen un complemento de los recursos que las entidades territoriales pueden tener como reserva destinada a atender sus obligaciones pensionales por medio de los Fondos Territoriales de Pensiones o de patrimonios autónomos.

Que teniendo en cuenta tanto las necesidades de las entidades territoriales originadas por la crisis causada por la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19, como el horizonte de pagos que estas deben hacer en el tiempo para hacer frente a su responsabilidad en el cubrimiento de los pasivos pensionales territoriales, se considera que las mismas cuentan con recursos acumulados en el FONPET que pueden ser utilizados excepcionalmente para atender las actuales circunstancias.

Que el artículo 7 del decreto 678 del 20 de mayo del 2020 faculta a Recuperación de cartera en favor de entidades territoriales. Con el fin de que las entidades territoriales recuperen su cartera y generen mayor liquidez, así como la posibilidad de aliviar la situación económica de los deudores, los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y demás obligados accederán a los siguientes beneficios en relación con los impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes de

pago a la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo Director del INSTRAMD para adoptar a través de acto administrativo e implementar en la entidad las medidas y disposiciones contenidas en el Decreto Nacional 0678 de 2020, teniendo en cuenta tanto las necesidades de este organismo del orden territorial originado por la crisis causada por la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 y para efectos de compensar la caída de los ingresos corrientes y aliviar presiones de liquidez ocasionadas por la epidemia en el ente.

Que, a partir de la fecha, los ciudadanos pagarán únicamente el capital adeudado por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes de pago, de 2019 y años anteriores, sin intereses ni sanciones. Adicionalmente, podrán obtener un descuento importante en el valor del capital, dependiendo de la fecha en la que se acojan al beneficio, con el propósito de apoyar a las personas que enfrentan los efectos del covid-19 en la economía, ofrecer un alivio económico a los ciudadanos y recuperar la cartera morosa de la entidad, y generar una mayor liquidez que permita contrarrestar el impacto de la pandemia

Que en virtud de lo anterior, el Instituto de Tránsito, transporte y Movilidad Distrital Richacha,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ADOPTAR por parte del Instituto de Tránsito, Transporte y Movilidad Distrital -INSTRAMD-, las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo 678 del 2020.

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR de conformidad al artículo 7 del Decreto 678 de mayo 20 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional, descuentos a los deudores para que se pongan al día con sus obligaciones, de acuerdo a los siguientes beneficios:

2.1. Los ciudadanos que tengan deudas pendientes con el INSTRAMD, podrán pagar el capital adeudado por conceptos de multas pendientes, derechos de tránsito e impuestos (vigencia 2019 y años anteriores), con exención de los intereses.

2.2. Además, podrán percibir un descuento importante en el valor del capital, dependiendo de la fecha en la que se acojan al beneficio así:

- Hasta el **31 de octubre de 2020**, se pagará el **80%** del capital sin intereses.
- Entre el **1 de noviembre de 2020** y hasta el **31 diciembre**, se pagará el **90%** del capital sin intereses.
- Entre el **1 de enero de 2021** y hasta el **31 de mayo de 2021**, se pagará el **100%** del capital sin intereses ni sanciones.

Parágrafo 1. Los beneficios y alivios aplican por cada vigencia de manera independiente y por cada vigencia se debe acreditar el pago total.

Parágrafo 2. En caso de que existan medidas cautelares previas por deudas vencidas estas solo podrán ser levantadas al pago total de las mismas.

Parágrafo 3. Entiéndase la lista de multas e impuestos señalados en el presente de forma enunciativa y no taxativa.

Parágrafo 4. Entiéndase por cartera, todos los conceptos enunciados en el presente Decreto, que, al corte del 20 de mayo del presente año, se encuentra en mora con el Instituto de Transito, Transporte y Movilidad del Distrito de Riohacha, en consecuencia, de los impuestos y multas correspondiente a la vigencia 2020 y a la vigencia fiscales anteriores, pero los que al corte del 20 de mayo no se encuentren vencidas no se les aplica los descuentos aquí señalados.

Adicionalmente, los deudores podrán celebrar acuerdos de pago por concepto de multas por de impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes de pago, de 2019 y años anteriores, sin intereses ni sanciones.

ARTÍCULO TERCERO: Terminación de procesos en sede Administrativa y Judicial cuando la persona tenga procesos en la sede administrativa o judicial por concepto de impuestos o multas podrá dar por terminado dicho proceso cuando:

Acredite el pago del 80% del capital sin intereses ni sanciones hasta el 31 de diciembre del 2020; el pago del 90% del capital sin intereses ni sanciones si lo hiciere entre el 1 de noviembre y 31 de diciembre 2020; y el pago del 100% del capital, sin intereses, ni sanciones, si se hiciere entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de mayo de 2021.

Parágrafo 1: Estos procesos se extienden también para aquellos que estén en cobro coactivo.

ARTICULO CUARTO: Para garantizar el acceso de la mayoría de los ciudadanos a los beneficios enunciados el Instituto de Transito, transporte y Movilidad Distrital-INSTRAMD- adelantará campañas de difusión en los distintos medios de comunicación hablados, escritos con publicación en la página Web del Instituto sobre la expedición del presente acto administrativo.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución Rige a partir de la fecha.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Riohacha a los ocho (08) días del mes de junio del 2020.



ISABEL BARROS OÑATE
Directora (E)